

**UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA**

**FACULTAD DE RELACIONES INTERNACIONALES, ESTRATEGIA Y  
SEGURIDAD**



**PROYECTO DE INVESTIGACIÓN “*QUÉ ACTORES SOCIOPOLÍTICOS  
INCIDIERON EN EL ESTABLECIMIENTO DE LA DICTADURA MILITAR  
ARGENTINA EN 1976*”**

**TUTOR: DOC. RAÚL NIÑO BUITRAGO**

**NELSON ALFREDO GOYENECHÉ VANEGAS**

**AÑO 2015**

## INTRODUCCIÓN<sup>1</sup>

El presente estudio sobre los actores sociopolíticos que incidieron en el establecimiento de la dictadura militar argentina en 1976, realiza un recorrido tanto histórico como descriptivo del contexto en que se desarrolla la historia Argentina en medio de crisis políticas internas que poco a poco iban desatando conflictos sociales en medio de problemas a raíz de la crisis económica mundial. De esta manera se realiza un análisis económico, político y social de los actores que hemos considerado, los más representativos para describir el proceso de establecimiento de un gobierno militar en medio de disputas por el poder e inconsistencias a nivel administrativo que desatan la furia social.

A través de un recorrido histórico se irá describiendo la manera como la junta militar se vale de estrategias para ir ganando adeptos y tomarse un lugar en el gobierno; en la escena juegan un papel importante los empresarios, los partidos políticos, la prensa, la iglesia y obviamente la sociedad en general.

En el camino que conduce al estudio de los actores sociopolíticos que incidieron en el establecimiento de la dictadura militar argentina, es importante prestar atención al estudio de diversos factores que resultan determinantes en este suceso. Por ejemplo, el

---

<sup>1</sup> Este estudio es resultado del trabajo realizado en el semillero de investigación Política y relaciones internacionales en América Latina (PoRIAL) en el marco del proyecto de investigación EL USO DE LA DISTRACCIÓN POR PARTE DE GOBIERNOS DICTATORIALES EN AMÉRICA LATINA aprobado por la vicerrectoría de investigaciones para la vigencia 2014 con el código EES 1556.

hecho que, en la madrugada del 24 de marzo de 1976 el gobierno constitucional de María Estela Martínez de Perón, Isabel, fue depuesto por un golpe de Estado. Luego de un período democrático de casi tres años. Alarma sobre la manera como los militares avanzaron, contra un régimen constitucional, tomándose el poder por la fuerza, e implementando una feroz y sangrienta dictadura que provocó efectos profundos y permanentes en el país.

Poniendo un poco en contexto, cabe resaltar que la junta militar llevaba mucho tiempo planeando el establecimiento de la dictadura y en consecuencia, tomarse el poder por la fuerza; el punto crucial a tratar es el análisis de las razones que impulsan esa iniciativa; de hecho, en el contexto previo al golpe de estado, durante sus últimos meses, avasallado por la dinámica misma de una crisis múltiple, el gobierno peronista de Isabel estuvo inmerso en un proceso precipitado de desgaste y deslegitimación, que se manifestaba en un profundo descontento social y en la permanentemente amenaza conspirativa de los militares; lo cual fue aprovechado para sembrar una especie de “terror” hacia el actual gobierno y sembrar una especie de “esperanza” sobre el nuevo gobierno militar que aparecería como salvador y garante de un nuevo orden estatal a favor de la prosperidad y el bienestar.

Dado que, el país se encontraba sumergido en una crisis económica de suma gravedad que se expresaba a través de una inflación galopante que desvirtuaba los índices económicos; se profundizaba una significativa crisis social, ocasionada por el alto grado de descontento de amplios sectores de la sociedad que se manifestaban a través de protestas u otros tipos de movilizaciones. A esto se sumaba un factor general

más: una crisis aguda del sistema político que afectaba directamente a los partidos. Estos eran vistos como actores incapaces de brindar una solución al caos, lo cual provocaba, proporcionalmente, un importante descrédito en el sistema democrático.

Desde la perspectiva en la cual el gobierno militar aparece como “salvador” todo parece estar muy bien, sin embargo, al final de este estudio se irán encontrando afirmaciones y argumentos que permiten concluir desde distintas perspectivas, por un lado, el escenario de crisis en el cual los actores van encaminando su rumbo hacia la satisfacción de intereses propios o incluso intereses que van en contra de sus principios, solo por satisfacer al gobierno de turno. Por otro lado, determinar que el gobierno militar definitivamente no resulta ser el gran salvador que todos esperaban y por el contrario “la cura resulta más cara que la enfermedad” demostrando que quienes esperaban el cambio, resultan incluso desapareciendo de la escena (si se comprobaba que estaba realizando cualquier tipo de actos que no satisfacían al régimen). En otras palabras, los principios del régimen militar no resultan ser muy buenos y los actores que inciden en el establecimiento de la dictadura militar en Argentina deben ser estudiados desde dos frentes: 1. Los que estaban a favor e inciden a voluntad propia y 2. Los que estaban en contra del régimen militar pero igualmente son determinantes al favorecer los intereses del régimen.

Para el desarrollo del presente trabajo se tomo como soporte teórico el análisis conceptual de la teoría de la guerra de distracción o también llamada de chivo expiatorio, que los gobiernos bien sean democráticos o por dictaduras de tipo militar empleaban, “para ocultar algún tipo de problema social o crisis de algún aspecto a

guerra se crea para distraer la situación interna y permitir al gobernante mantener su popularidad alta o participar exitosamente en procesos de reelección” (Niño-Iregui, 2014).

Esta teoría cobra importancia ya que a través del trabajo y durante el análisis de cada uno de los actores sociopolíticos que inciden en la participación de los militares a ejecutar los golpes militares, también se determina como estos ayudaban de una forma o de otra a crear una confrontación con el fin de poder seguir manipulando las actividades del gobierno de turno, cabe destacar que estas manipulaciones podrían estar determinadas por una confrontación directa o por “el análisis concluye que el utilizar una estrategia de distracción no requiere entrar a un conflicto total, pues en la mayoría de casos solo la amenaza del uso de la fuerza es suficiente para generar apoyo”(Niño-Iregui, 2014). Esto nos permite enmarcar de una forma clara como Latinoamérica y en especial Argentina, vivían en una dinámica de conflictos de diplomacia marcada por una izquierda y derecha radical, reflejada en la tensión que se vivía en todo el continente.

Es de destacar que la teoría de la distracción se refleja en Argentina en especial durante la dictadura militar de 1976, cuando el país se sumía en una crisis económica y en una constante y marcada violación interna en donde los derechos humanos eran afectados con masacres contra la población civil, pero habilidosamente la junta militar lanza un ataque para recuperar las islas Malvinas o Flakland bajo el poder de la Corona Británica, un ataque siendo conocedores del poderío militar de Inglaterra, pero esto logra distraer a la población civil de los problemas y despierta un sentido nacionalista reflejado de muchas maneras “un deseo ferviente del pueblo de colaborar en la recolección de fondos y vestuario de clima frío para la causa. Las emisoras de radio y

estaciones de televisión, organizaron campañas con participación de un grandioso elenco de artistas, con el único fin de recolectar dinero para la guerra” (González, 1984).

Así podemos ver claramente como esta teoría puede alcanzar sus objetivos mediáticos para que los gobiernos que la empleen logren sostenerse y cumplir con sus interés sin importar los resultados que pueda tener el mismo Estado o la población civil.

## **CAPITULO 1: SITUACIÓN ECONÓMICA Y POLÍTICA DE ARGENTINA ANTES DEL GOLPE MILITAR DE 1976.**

El análisis de la influencia de los actores sociopolíticos en el establecimiento de la dictadura militar Argentina de 1976, hace necesario el estudio de diversos factores que juegan un papel crucial como determinantes en el curso de la historia, lo cual es sinónimo de toma de decisiones, complots, alianzas y una serie de juegos de poder que se van desencadenando en distintos frentes, con diferentes propósitos, ya sea mantener y defender la dictadura o bien sea, derrocarla, desprestigiarla y acabarla.

En contexto, toda la historia sobre la dictadura militar en Argentina posee distintos matices que es importante tener en cuenta y estudiar en detalle para entender cómo y por qué se van desarrollando los acontecimientos que dan origen a múltiples momentos de gran tensión para la nación.

Teniendo en cuenta la evidente división en la que se encontraba el país, podemos resumir que se presenta una división entre la izquierda y la derecha, una lucha entre el gobierno constitucional y el democrático, una lucha social desencadenada en protestas y terrorismo a raíz de las crisis económica y política, resistencia sindical, crisis de los partidos, solo por mencionar algunos detonantes de la crisis antes y después del establecimiento de la dictadura.

En primera instancia, la gran motivación del golpe militar del 24 de marzo de 1976 fue, “poner fin a toda resistencia sindical, social, religiosa, simbólica, cultural, educativa y política que había crecido en los 60 y 70” (Mallimaci, 2006). En sí, el gran objetivo del golpe era crear un orden, desterrando los legados del Peronismo, lo cual representaba un matiz izquierdista para la nueva dictadura que quería posesionarse.

Para tratar de mitigar los efectos de la crisis el gobierno militar implementó su acción en dos frentes. Por un lado, el militar, tendiente a barrer con los actores que dentro de la población, potencialmente o de hecho, se comportaban, en sus palabras, “subversivamente”. Por otro lado, el económico, que implicaba terminar con el modelo de sustitución de importaciones y así desterrar definitivamente el sistema obrero industrial consolidado bajo el peronismo. El cambio fundamental consistió en la erradicación y modificación absoluta de los sustentos estructurales e institucionales de los sectores populares, de tal modo que la experiencia de activación social, pasada y presente, no vuelva a repetirse. Por lo tanto, junto al aniquilamiento, desaparición y tortura de personas, se reubicó a la clase trabajadora, política e institucionalmente en una posición subordinada. No sólo se coartó a las organizaciones políticas y corporativas mediante la limitación jurídica, sino que principalmente, se llevó a cabo una reforma económica que suprimió las posibilidades funcionales de su posible desarrollo a futuro. En definitiva, y siguiendo a Adolfo Canitrot, la economía sirvió a un plan político de disciplina social (Benítez, 2010).



En este orden, es sumamente necesario retroceder algunos años en la historia para poner en contexto el escenario en el que se desarrollan los detonantes de este suceso, valorando la importancia de estudiar la aparición de actores y coyunturas en momentos históricos específicos que van guiando el estudio hacia la consecución de actores sociopolíticos que incidieron en el establecimiento de la dictadura.

El clima de tensión e inestabilidad ya se venía percibiendo a lo largo del siglo XX en Argentina, impulsado por diversos golpes de Estado (en 1930, 1943, 1955, 1962, 1966, 1976), por parte de militares, lo cual generó una alternancia de regímenes democráticos y autoritarios que han afectado considerablemente el progreso argentino, como se puede ver en las crisis económicas, los gobiernos corruptos, la violación sistemática a los derechos humanos y crisis diplomáticas. Por ejemplo, desde la época del tercer mandato de Juan Domingo Perón, su muerte y el posterior gobierno de su esposa María Estela Martínez de Perón que en medio de decisiones irresponsables, falta de autoridad presidencial y cohesión entre la burguesía nacional y el sector sindical, permitieron concentrar una serie de acontecimientos políticos, sociales y económicos que abrieron el espacio adecuado a la instauración del Proceso de Reorganización Nacional (PRN) encabezado por una Junta Militar que agrupaba las tres Fuerzas Militares encabezadas por Eduardo Massera, Orlando Ramón, y el Comandante del Ejército el General Jorge Rafael Videla (Eggers, 2007).

Ahondando un poco más, sobre los sucesos mencionados en el párrafo anterior, cabe destacar que, las Fuerzas Armadas a lo largo de la historia han ido reclamando un

lugar dentro de las decisiones y actuaciones de los estados , convirtiéndose en actores cruciales; por ejemplo, desde 1930 gracias a la incidencia de estas en actuaciones negativas del gobierno (Gobierno Democrático de la Unión Cívica Radical , que gobernaba desde 1916) en 1943 ponen fin al fraude electoral que se había hecho hegemónico en nombre de” la Patria”; en 1955 derrocan al gobierno democrático del Partido Peronista surgido con amplio apoyo popular en 1946; en 1962 deciden la renuncia de los funcionarios de la Unión Cívica Radical Intransigente electos en 1958; en 1966 irrumpen el gobierno de la UCR del Pueblo y en 1976 golpean a un gobierno peronista. Estas dos últimas intervenciones muestran a las Fuerzas Armadas jugando un papel central dado que ya no repiten el ciclo de elecciones-golpe que terminan en un nuevo llamado a elecciones sino que se proponen llevar a cabo transformaciones profundas en el modelo de acumulación y el modo en que se venía administrando al Estado durante varios años.(Mallimaci, 2006).

Según Benítez (2010). Desde mediados de la década del cincuenta, tras el derrocamiento del primer proyecto nacional-popular del país, la Argentina se vio sumida en una notable agudización de su crisis institucional, producto entre otras razones, del incremento de los desequilibrios económicos.

Una explicación del rumbo errático que tuvo la historia política de Argentina puede encontrarse en lo que Rusell y Perina describen en su libro Argentina en el mundo como la doble diplomacia de Argentina, por un lado la militar, encarnada en los tres representantes de la Junta Militar, y por otro lado, la económica, la cual estaba

representada por la nueva coalición hegemónica en Argentina (exportadores, importadores y fracciones superiores de la burguesía nacional y transnacional comandadas por el sector financiero) (Rusell y Perina, 1988). La autonomía de la que gozaban las Fuerzas Armadas en Argentina les permitió aumentar sus privilegios corporativos e imponer en gran parte su propia visión del mundo, la cual chocó en ocasiones con algunos objetivos que tenían los agentes económicos. (Rusell y Perina, 1988).

Los militares identificaron una deficiencia en el sistema político argentino de la década de los sesenta y primeros años de los setenta, y esta insuficiencia era una crisis entre las relaciones Estado – sociedad. Para los militares era de prioridad resolver este problema, así según Vera (2001). La cúpula militar a forma de médicos, diagnosticaban que la crisis se centraba en la intervención Estatal para producir desarrollo de la sociedad en temas políticos, económicos y de asistencia, a su vez, el proceso de intromisión relegaba la sociedad a una órbita de dependencia de las esferas del Estado. La gran medicina que encontraron estos doctores era que “aspiraban a la supresión de la política o... a la constitución de un régimen político de participación restringida” (Vera, 2001). Los militares sopesaban que al lograr la supresión política y posicionarse en la cúspide del poder accederían a un control de esa crisis de una forma directa, es decir que podrían cambiar las relaciones Estado- sociedad.

El período de 1955 a 1973 estará marcado, desde lo político, por construir una democracia tutelada por las Fuerzas Armadas un estado burocrático-autoritario, a fin de evitar el regreso del peronismo y en lo económico, por buscar nuevos modelos

de acumulación que superen el intervencionismo estatal, el igualitarismo y la industrialización por sustitución de importaciones considerada “populista” (Mallimaci, 2006).

Un determinante que permitiría la instauración de una nueva dictadura militar, es el cambio de las estructuras económicas para la imposición de un nuevo modelo promovido globalmente por Estados Unidos: “el neoliberalismo” que en medio de un fuerte impulso por la reestructuración del capitalismo a nivel internacional, reformó en Argentina su economía nacional. Por consiguiente se harían evidentes las consecuencias del nuevo modelo Económico Argentino en la medida que el sector fabril dejó de ser el núcleo impulsor y articulador del proceso económico, político y social; se percibe una acelerada retracción de sus segmentos más complejos por efecto del reemplazo de los mismos por importaciones, además, se daría fin a la sustitución de importaciones, modelo que había permanecido durante décadas, naciendo otro modelo basado en el sistema financiero. Lo cual solo podía traer como consecuencia que, Argentina perdiera participación en el conjunto de la actividad económica de manera pronunciada. (Shorr, 2010). Esto se debe a una lógica contemplada desde las acciones políticas en la dictadura militar. Uno de los objetivos propuestos por el PRN era limitar brutalmente el poder de negociación de los obreros, ya que su participación política y económica era manejada como una amenaza para los sectores dominantes y no era para menos, el sector sindical estaba ideológica y políticamente bien organizado. (Shorr, 2010).

Esta “amenaza obrera” pasó por una transformación radical impulsada por una visión y acción por parte de las élites dominantes denominada “revancha clasista” que consistía en métodos de represión y desaparición forzada en la que tendrían como meta destruir la identidad popular, las representaciones políticas y las bases estructurales de los movimientos sindicales expandiendo sus ingresos en múltiples sectores de la sociedad bajo métodos de degradación de salarios, obtención de rentas financieras y destrucción de pequeñas y medianas empresas a través de la apertura económica (Flacso, 2010) que dio por resultado más de 20.000 desaparecidos y múltiples campos de concentración con complicidad de los grandes empresarios. (Flacso, 2010).

La fórmula de la recomposición de la dominación social mediante la opresión hacia la clase trabajadora y la eliminación de medianas y pequeñas empresas coincidía con tres metas establecidas por el PRN; “la redefinición del accionar estatal, la modificación de la estructura productiva y la reversión de la dinámica sustitutiva en el plano económico y social” (Flacso, 2010).

En el contexto de crisis previo a la dictadura militar donde la inflación y la inestabilidad económica eran “insoportables”, un actor empezaba a tomar relevancia en esta historia, se trata de José Alfredo Martínez de Hoz, quien se convertiría en uno de los personajes más influyentes a la hora de hablar de la redefinición del papel del Estado en cuanto a la asignación de los recursos, la restricción de los salarios, la reforma financiera y la sustitución de importaciones (Shorr, 2010). Es así, quien sería crucial en el camino que tomó la economía argentina para una supuesta mejora; ya había

trabajado como político economista, abogado y profesor universitario argentino, participó como ministro de Economía del presidente José María Guido por unos pocos meses durante 1963 y como ministro de Economía de la dictadura militar autodenominada Proceso de Reorganización Nacional entre 1976 y 1981 (Hoz, 2000). Para controlar la inflación en principio, Martínez de Oz redujo los salarios mediante políticas dirigidas hacia las empresas, que de no hacerlo serían acreedores de fuertes castigos a quienes no acataran dicha orden, esto ocasionó que en 1976 y 1977 la inflación se redujera de un 40% a índices del 10 y 9% (Rapoport, 2003).

El proyecto económico de Martínez de Hoz que apuntaba a un mercado de capitales terminando con el subsidio de los empresarios ineficientes por parte de los ahorradores y vía regulación estatal establecer dicho mercado, a lo que bastantes agentes financieros alarmó, ya las grandes entidades financieras extranjeras y nacionales obtendrían más confianza y por ende acapararían la totalidad del mercado, relegando la pequeñas entidades financieras. Por ello se dispuso la creación de una comisión que representara el sector privado y la banca oficial. La comisión posteriormente escribiría un informe en el que propondría establecer una garantía estatal a los depósitos mediante una ley que lo regulara, situación a la que se opondría Martínez de Hoz pues si se garantizaba el depósito al ahorrador, este no detallaría la solvencia y las entidades podrían ofrecer cualquier interés, entonces al ahorrador no le importaría invertir en cualquier banco (Novaro, 2005). Esto ocasionó una pequeña disputa entre Videla y sus colegas militares, sin embargo la minoría representada por Martínez De Hoz y la necesaria aceptación de la CAL hizo posible la aceptación de la ley acompañado por la garantía.(Novaro, 2005)

El escenario de caos e incertidumbre en Argentina no podía ser peor, previo al establecimiento de la dictadura militar, teniendo en cuenta que, la libertad del sistema financiero podría ocasionar efectos inflacionarios que estarían en contra de las políticas anti-inflacionarias que consistían en aumentar las tasas de interés pasivas, esto hacía que los ahorradores incrementaran sus colocaciones en activos financieros cuasi líquidos, sustentado en que el ahorro aumentaría y este podría dirigirse hacia inversiones productivas (Rapoport, 2003).

Jorge Schvarzer expone que los mencionados hechos no guiaban la economía a un mercado de capitales de largo plazo articulado con el sector productivo, sino a uno volátil, especulativo y de corto plazo, y todo esto es debido a una razón: ese fue realmente el diseño de la reforma acompañado por un alto porcentaje de improvisación institucional, lo que también tiene un razón, para Martínez de Hoz viera que esa era una oportunidad inigualable en la historia, por lo que dentro de sus planes no convenía una política moderada que condujera al Estado de abstenerse a tomar caminos que pusiesen representar altos riesgos, pues eran necesarios para poder alcanzar sus metas (Schvarzer, 1986 citado en Novaro, 2005).

Este plan económico entonces originó una serie de consecuencias que llevaron a la economía argentina a crisis económicas que hasta el día de hoy le ha salido bastante costoso. En primer lugar la transformación estructural sobre el financiamiento del sector

industrial, se vio estancada puesto que hasta 1976 el eje del crecimiento económico argentino era la industrialización. (Rapoport, 2003).

Dado que, el país se encontraba sumergido en una crisis económica de suma gravedad que se expresaba a través de una inflación galopante que desvirtuaba los índices económicos. En consonancia, se profundizaba una significativa crisis social, ocasionada por el alto grado de descontento de amplios sectores de la sociedad que se manifestaban a través de protestas u otros tipos de movilizaciones. A esto se sumaba un factor general más: una crisis aguda del sistema político que afectaba directamente a los partidos. Estos eran vistos como actores incapaces de brindar una solución al caos, lo cual provocaba, proporcionalmente, un importante descrédito en el sistema democrático. Existía, también, un superlativo grado de violencia política, vinculada tanto a las luchas intestinas dentro del mismo peronismo, cuanto a la acción de grupos guerrilleros de izquierda que se enfrentaban a las fuerzas de represión estatal y paraestatal. El proceso de radicalización de grupos políticos, iniciado a finales de los años 60, continuaba expresando su lado más extremo en la acción armada, considerada como el estadio superior de la acción política tradicional. Y aunque estos se encontraban en franca declinación en el último año del gobierno peronista, mantenían cierto protagonismo en la escena pública que resaltaban con interés los militares. Los más notorios fueron: Montoneros, proveniente de un sector del peronismo de izquierda; y el guevarista Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), fracción armada del Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT) (Benítez, 2014).



Debido a un proceso inflacionario constante se profundizó la puja distributiva entre el Estado, sectores sindicales y empresariales, creando un clima de gran inestabilidad incapaz de sentar las premisas mínimas de viabilidad política y un funcionamiento económico correcto para ciertos sectores del capital. El cual debe ser entendido como la expansión o reproducción de la acumulación del capital, especialmente por parte de grandes unidades económicas, que en tal proceso van transformando y eliminando a otros actores del sector. Es decir, un crecimiento desigual y desigualizante en principal beneficio de unidades mono u oligopólicas, cuya acumulación subordina los comportamientos económicos y la distribución general de recursos en el resto de la sociedad.” En este sentido, quienes deciden si el comportamiento económico es correcto, o no, dependerá del poder que tienen aquellos que analizan tal situación (Benítez, 2014).

En los meses previos al golpe, la persistente inflación y el muy elevado déficit fiscal, cubierto en gran medida con emisión monetaria, anticipaba medidas urgentes. El ministro de economía de entonces, Celestino Rodrigo, intentó poner en marcha, a principios de junio de 1975, el último plan de mejora económica en democracia. Este consistió en producir una fuerte devaluación para corregir el desequilibrio en la balanza de pagos, y un incremento en las tarifas públicas para mejorar la situación fiscal. Estas medidas, que principalmente causaron una fuerte caída del salario real, se conocerían como el “Rodrigazo”, y tuvieron un enérgico rechazo del sector sindical que terminó con las ambiciones del ministro y su principal asesor, el banquero Ricardo Zinn, que buscaba por medio de este proceso licuar la deuda del sector privado. A partir de aquí comenzó una aceleración inflacionaria que dio lugar a un sistema económico lleno de

incertidumbres y alto desequilibrio, debido al uso permanente de prácticas de reajuste (Benítez, 2014).

El diagnóstico era claro y se encontraba extensamente aceptado en los sectores oligárquicos y empresariales de orientación librecambista, sobre los que confluían las nuevas ideas tecnocráticas y tecno científicas del ámbito económico mundial. Cabe volver a señalar, que durante la década del '70 el sistema económico internacional se encontraba atravesando una crisis que dio lugar a un cambio a nivel mundial del modelo histórico de acumulación, que se había caracterizado por su alta tasa de ocupación, una importante cantidad de reformas sociales y ampliación del Estado, que conformaba sistema de integración y desarrollo conocido como Estado Benefactor (o Welfare State). Esta fracción del poder económico va a persuadir al sector militar sobre la necesidad de imponer un nuevo modelo de orientación liberal. La nueva alianza, compuesta por el sector rural tradicional, el capital financiero y el sector industrial concentrado de bienes de exportación, junto a algunos mercado internistas con capacidad de diversificación, dejará atrás a la vieja alianza de industrialistas concentrados del gobierno de Onganía. Ahora tendrá su oportunidad de cambiar el sistema de acumulación consolidado hasta entonces y someterlo así al tratamiento neoconservador y a la lógica ordenadora del mercado.

De hecho, ante el escenario de caos previo a la dictadura, el gobierno militar debía tratar de implementar su acción en dos frentes. Por un lado, el militar, tendiente a barrer con los actores que dentro de la población, potencialmente o de hecho, se

comportaban, en sus palabras, “subversivamente”. Por otro lado, el económico, que implicaba terminar con el modelo de sustitución de importaciones y así desterrar definitivamente el sistema obrero industrial consolidado bajo el peronismo. El cambio fundamental consistió en la erradicación y modificación absoluta de los sustentos estructurales e institucionales de los sectores populares, de tal modo que la experiencia de activación social, pasada y presente, no vuelva a repetirse. Por lo tanto, junto al aniquilamiento, desaparición y tortura de personas, se reubicó a la clase trabajadora, política e institucionalmente en una posición subordinada. No sólo se coartó a las organizaciones políticas y corporativas mediante la limitación jurídica, como veremos más adelante, sino que principalmente, se llevó a cabo una reforma económica que suprimió las posibilidades funcionales de su posible desarrollo a futuro. En definitiva, y siguiendo a Adolfo Canitrot, la economía sirvió a un plan político de disciplina social (Benítez, 2014).

Tras la descripción del contexto económico, que solo puede resumirse en caos, es inevitable percibir que en todo momento se encuentra permeado por sucesos o actores políticos que determinan el rumbo de la historia; sin embargo, es imposible dejar de lado una breve pero productiva descripción del escenario político, en la medida que sirve de guía para entender el contexto en que se desarrollan los hechos que desencadenan en la dictadura militar de 1976.

En los comicios de 1958 y 1963, donde resultaran electos los doctores Arturo Frondizi y Arturo Humberto Illia, respectivamente -ambos radicales- el justicialismo se

encontraba impedido de participar por haber sido proscripto por la Revolución Libertadora que, en septiembre de 1955 derrocara a su fundador, el general Juan Domingo Perón; y posteriormente, luego del regreso del anciano líder, había vuelto a triunfar abrumadoramente en las elecciones de marzo de 1973, con la fórmula Héctor J. Cámpora-Vicente Solano Lima; y luego en las de septiembre de ese mismo año, donde Perón compartiera fórmula con su tercera esposa, María Estela Martínez “Isabelita”, para iniciar su breve última presidencia, truncada por su muerte el 1º de julio de 1974). Precisamente en las consecuencias de ese hecho radicaba la circunstancia primordial que hacía del día de la asunción del Dr. Alfonsín una fecha histórica (Fuster, 2007).

Al morir Perón, la sucesión presidencial establecía que el poder quedase en manos de su esposa, en su carácter de vicepresidenta electa. Sin embargo recibió duras críticas, llegando a considerarla “no apta” para desempeñar un cargo como el que le había sido encomendado. Se dice que se limitó a su presencia formal para el protocolo y los actos oficiales, mientras que los verdaderos hilos del gobierno eran manejados desde las sombras por su ministro de Bienestar Social, José López Rega. Este ex-cabo de la Policía, que había sabido granjearse la confianza de Perón durante el exilio del general en Madrid, y que luego había ascendido vertiginosamente hasta ser nombrado ministro, era un personaje, a quien se conocía como “El Brujo”, volcado al esoterismo, con el cual en apariencia controlaba a la Presidenta, mujer poco culta y altamente influenciada. Esto podría haber resultado risible y haber pasado a formar parte de la “petite histoire”, si no hubiera coincidido con un hecho mucho más trascendental para la vida institucional del país. López Rega fue el ideólogo y creador de la “Alianza Anticomunista Argentina” (la “Triple A”), una organización parapolicial de extrema

derecha responsable de innumerables atentados y asesinatos contra artistas e intelectuales sospechados, con razón o sin ella, de simpatizar o profesar ideas izquierdistas, debido a lo cual muchos huyeron del país para salvar sus vidas. El rechazo popular a las actividades de esta organización, así como a la cada vez más evidente injerencia de López Rega en los asuntos de Estado, actuaron como presión ante la Sra. De Perón, quien en julio de 1975 lo envió a Europa con un ambiguo cargo de “Embajador Plenipotenciario”, y facilitó así su huida del país. Lamentablemente, la ausencia de su creador no desarticuló a la “Triple A”, la que siguió actuando impunemente (Fuster, 2007).

Paralelamente a este terrorismo prohijado desde el poder, en el país se había instalado desde comienzos de la década el terrorismo de izquierda y de derecha, representado por distintas facciones, tales como “Montoneros”, FAR (Frente Argentino Revolucionario) y ERP (Ejército Revolucionario del Pueblo). Habían hecho su aparición pública en 1970, con el secuestro y posterior asesinato del general Pedro Eugenio Aramburu, uno de los jefes de la Revolución Libertadora, luego presidente de facto hasta la asunción de Frondizi en 1958 y responsable del fusilamiento del general Valle y de varios militantes peronistas debido a un fallido intento revolucionario el 9 de junio de 1956. El Crimen fue reivindicado por “Montoneros”, y desde allí se sucedieron una serie de atentados con bombas, numerosas muertes y otros hechos que fueron creando una sensación de inseguridad desconocida para la ciudadanía (Fuster, 2007).

“Montoneros” se nutría en la ultraderecha nacionalista; ERP y FAR se identificaban con la izquierda. Todo este amplio espectro ideológico fue utilizado por Perón para volver al poder, si bien las divergencias internas habían quedado sangrientamente patentizadas en los enfrentamientos ocurridos en Ezeiza el 20 de junio de 1973, en ocasión del regreso del líder al país. Durante los primeros tiempos de la tercera presidencia peronista pareció haberse alcanzado la calma, incluso algunos dirigentes guerrilleros ocuparon cargos en el gobierno, pero los atentados continuaron, y el propio Perón, en su discurso del 1º de Mayo de 1974, tomó distancia llamándolos “imberbes”, lo que motivó el pase a la clandestinidad de las distintas agrupaciones. A partir de allí, la escalada terrorista recrudeció, con el agravante de coincidir en el tiempo con el surgimiento de la ya mencionada “Triple A” (Fuster, 2007).

Luego de la muerte de Perón el país parecía un polvorín a punto de estallar mientras la Presidenta se mostraba más y más incompetente para controlar la situación. Durante el año 1975 solicitó licencia varias veces por razones de salud, siendo reemplazada por el Dr. Italo Argentino Luder, Presidente del Senado, quien, en ejercicio del poder, firmó en el mes de octubre el decreto que permitía que las Fuerzas Armadas iniciaran el combate contra la subversión, con el “Operativo Independencia”, que se radicó en los montes de Tucumán, uno de los focos principales de la guerrilla. Los términos en los que estaba redactado el decreto, en el que se pedía “aniquilar a la subversión”, representaron para el gobierno una forma de empollar el huevo de la serpiente, ya que se utilizaron más tarde como justificación de los crímenes cometidos durante el Proceso. Meses después de que los militares se instalaran en el poder, el general Reynaldo Bignone recurrió la idea de “aniquilamiento” en su discurso durante la

ceremonia de egreso de la 107ª promoción de subtenientes del Colegio Militar. Sus palabras fueron: “La lucha se planteó hasta el aniquilamiento del enemigo. Y el aniquilamiento se logra por la persecución hasta que el enemigo no exista” (Fuster, 2007).

En conclusión, más allá de una representación histórica, hasta ahora hemos ido describiendo una serie de actores y escenarios que desencadenan una serie de fenómenos influyentes a nivel económico y político para establecer una dictadura militar en Argentina, demostrando que la llegada al poder de la Junta Militar en 1976 al gobierno argentino fue a causa de unas condiciones críticas previas en aspectos sociales, políticos, económicos e internacionales que dieron pie para su golpe de Estado. Este proceso de cambio de régimen obtuvo la legitimación del pueblo argentino dadas las circunstancias en las cuales se encontraban viviendo, ya que estos veían como su calidad de vida se venía abajo con cada día que pasaba. Además, el proceso de alternancia de gobiernos democráticos y regímenes de facto que se vinieron desarrollando a lo largo del siglo XX en Argentina, ablandó la voluntad de los ciudadanos argentinos que de alguna manera se habían acostumbrado a este proceso. Todo esto sumado al contexto internacional en el cual estaba inmersa la República Argentina a finales de la década de 1970 de un furioso anticomunismo y rechazo a toda manifestación política de izquierda por el bloque occidental representado por Estados Unidos, llevaron a que el golpe de Estado por parte de la Junta Militar fuera algo previsible (Fuster, 2007).

A modo de conclusión, a lo largo de este capítulo se han evidenciado las múltiples maneras como las Fuerzas Armadas se las han ingeniado para reclamar y posicionarse en un lugar crucial dentro de los acontecimientos y decisiones importantes en la historia Argentina; así mismo, en un contexto de división existente entre la izquierda y la derecha, el rumbo de la historia toma distintos matices que dan origen a múltiples factores y acontecimientos, como evidencia de una constante lucha por mantener el poder, en este orden se presentan luchas, complots, alianzas y juegos de poder manipulados por actores según los intereses.



## **CAPITULO 2 .LA INCIDENCIA DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS EN EL ESTABLECIMIENTO DE LA DICTADURA MILITAR ARGENTINA EN 1976**

Durante el primer capítulo quedo en evidencia la división social y política a la que venía enfrentándose Argentina, previo a la dictadura de 1.976, lo cual quedo prácticamente resumido a una lucha entre la izquierda y la derecha. En este orden, el estudio de los actores socio políticos que tuvieron incidencia en el establecimiento de la dictadura va girando en torno a los factores más determinantes en la historia, por ejemplo, queda demostrado que las Fuerzas Armadas cada vez van tomando más fuerza y representación en los acontecimientos y decisiones cruciales del Estado, convirtiéndose en actores principales o sumamente relevantes para el desenvolvimiento de los acontecimientos (algunas veces) a favor de sus intereses. Tanto así, que llegan a convertirse en una especie de “héroes” que vienen a cambiar el status quo y salvar a la nación de la decadencia y la desgracia; tal como quedo planteado anteriormente, se habla de transformaciones profundas en el modelo de acumulación, cambiar la fuerza por la diplomacia y el poder político a favor de un reordenamiento estatal donde se cambia totalmente el modelo con que se venía administrando el estado.

Tal como mencionamos al comienzo de este estudio, para analizar la incidencia de los actores socio políticos en el establecimiento de la dictadura militar de Argentina, es importante prestar atención a múltiples actores y factores que van apareciendo en escena, por ejemplo los partidos políticos.

Según, Benítez (2010). Se profundizaba una significativa crisis social, ocasionada por el alto grado de descontento de amplios sectores de la sociedad que se manifestaban a través de protestas u otros tipos de movilizaciones. A esto se sumaba un factor general más: una crisis aguda del sistema político que afectaba directamente a los partidos.

Analizar el papel de los partidos vale la pena, en la medida que vamos a ir descubriendo su incidencia a nivel político y social, demostrando que cobran un papel crucial como detonantes de múltiples disputas políticas que terminan “motivando” al pueblo a desencadenar luchas entre sí, ante el descontento por el manejo que se le da al sistema, motivo que posteriormente impulsa el establecimiento de la dictadura como garante de un nuevo orden.

Los partidos políticos eran vistos como actores incapaces de brindar una solución al caos, lo cual provocaba, proporcionalmente, un importante descrédito en el sistema democrático. Existía, también, un superlativo grado de violencia política, vinculada tanto a las luchas intestinas dentro del mismo peronismo, cuanto a la acción de grupos guerrilleros de izquierda que se enfrentaban a las fuerzas de represión estatal y paraestatal. El proceso de radicalización de grupos políticos, iniciado a finales de los años 60, continuaba expresando su lado más extremo en la acción armada, considerada como el estadio superior de la acción política tradicional. Y aunque estos se encontraban en franca declinación en el último año del gobierno peronista, mantenían cierto protagonismo en la escena pública que resaltaban con interés los militares. Los más notorios fueron: Montoneros, proveniente de un sector del peronismo de izquierda; y el

guevarista Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), fracción armada del Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT) (Benítez, 2010).

Visto el escenario de esta manera, es válido afirmar que los militares aprovecharon el vacío de poder, el descontento social y la crisis económica para buscar apoyo en algunos partidos políticos que se convertirían en toda una estructura de apoyo político y constitucional que daría vía libre a las reformas estructurales pero drásticas y polémicas, posterior al establecimiento de la dictadura militar.

Vale la pena, mencionar que el plano político a nivel internacional (Latinoamérica), pasaba por un momento particular, caracterizado por un claro desplazamiento de gobiernos democráticos por regímenes de hechos, además en parte de su territorio se imponían las dictaduras militares. Lo cual de una manera u otra representaba reconocimiento para el gobierno (Benítez, 2010).

Los partidos políticos, pero en especial los partidos conservadores provinciales juegan un papel crucial en el consenso inicial para establecer la dictadura militar en Argentina, teniendo en cuenta cierta “legitimidad” de origen a la intervención de los militares en la vida política del país. Esta es una característica estructural propia del sistema político argentino gestada a partir de las mismas intervenciones militares a partir de 1930 donde se fue conformando un sistema político “pretoriano”, que

incorporó en su interior a las Fuerzas Armadas como un componente esencial y permanente (Benítez, 2010).

Se constituyó, de esta forma, una cultura política que aceptaba la politización de las fuerzas castrenses; las cuales se desplegaban en el escenario político como un actor singular que, debido a su fuerza militar, definía el juego institucional. Por lo tanto, la injerencia de éstas en la vida democrática del país se fue tornando, para la sociedad, como una alternativa siempre posible. Esto denotaba y alimentaba, a la vez, una escasa convicción en los valores de la democracia, y sus tiempos, reflejada en la pérdida de legitimidad del orden constitucional (Benítez, 2010).

En este orden, la lucha entre gobiernos democráticos y constitucionales demostraba a nivel político el desequilibrio y la falta de estabilidad y garantías para los líderes de algunos partidos políticos, de hecho gracias a los datos históricos es posible señalar que el establecimiento de la dictadura trata de dar solución a este flagelo, a pesar de los múltiples obstáculos que debe superar en cuanto a que no es fácil lograr reconocimiento y aceptación a corto plazo.

La relación con los partidos políticos es un ejemplo de los cambios en las propuestas y accionar del pacto golpista. En plena represión y euforia dictatorial no hay diálogo con los partidos políticos pero sí encuentros periódicos con jerarcas católicos y notables del ámbito cultural y social. Hay un nuevo intento de la derecha argentina de

formar una coalición cívico-militar que hiciera suyo las propuestas de las Fuerzas Armadas mientras otros miembros de la coalición proponen comenzar desde lo local para crear una nueva dirigencia social y política “no contaminada”. El fracaso de uno y otro proyecto como el aumento de las dificultades económicas llevan a que en 1979/1980 las Fuerzas Armadas vuelvan a buscar un acuerdo con la dirigencia política. En el documento “Bases políticas del Proceso” manifiestan la necesidad de una “solución política” con los partidos que acepten su hegemonía. Se rechaza, eso sí, aquellos que propugnen ideologías totalitarias, el culto a la personalidad, la lucha de clases y una vez más el “populismo demagógico y anárquico”, es decir toda expresión de izquierda y el peronismo. Juzgar la “guerra sucia” (es decir el terrorismo de Estado) es un tema que no entra en agenda (Mallimaci, 2014).

En este orden de ideas, (Balza, 2005). El esquema del poder dictatorial se completó con la designación de "gobernadores" en cada provincia e "intendentes" en las ciudades. La designación de "gobernadores" en las provincias, recayó casi siempre en un militar. En el caso de los "intendentes" de ciudades, en un gran número de casos se trató de políticos civiles, entre ellas la ciudad de Rosario, la segunda del país en aquel momento.

Los partidos políticos, explícita o implícitamente, aportaron un total de 794 "intendentes" de la dictadura, divididos según la siguiente pertenencia Unión Cívica Radical: 310, Partido Justicialista: 169, Partido Demócrata Progresista: 109, Movimiento de Integración y Desarrollo: 94, Fuerza Federalista Popular: 78,

Movimiento Popular Neuquino: 23, Partido Demócrata Cristiano: 16, Partido Intransigente: 4, Partido Socialista Democrático: 1 (Balza, 2005).

En el contexto de crisis de los partidos políticos tras el establecimiento de la dictadura militar, surge un actor sumamente importante, los sindicatos, dado que, (Portalplaneta, 2009). Se dedicaron a deshacer el esquema político que con tanto esfuerzo había diseñado Perón, porque se sintieron relevados de sus compromisos, los cuales habían sido asumidos recién en 1973. Además, estos creían que el movimiento obrero debía entrar en la etapa política abierta con la muerte del presidente, los cuales dejaba sin efecto a los viejos compromisos con el gobierno. Por ejemplo, la confederación general de trabajo (CGT) pasó a manos de los sindicalistas, pocos meses después de la muerte de Perón. Esta nueva dirigencia negoció con el gobierno, objetivos diferentes a los contenidos en sus estatutos, inclinándose por la formulación del Pacto social y el desplazamiento de los líderes sindicalistas y políticos, que no concuerden con las ideas del nuevo gobierno.

En este punto, resulta complejo continuar hablando de la incidencia de los partidos políticos (tal como se conocían PRT y ERP, por ejemplo) en el establecimiento de la dictadura militar argentina en 1976, dado que, los antiguos partidos habían perdido totalmente su esencia desde que se instaura el gobierno militar, era imposible hablar de un ejercicio democrático (teniendo en cuenta la participación de la oposición), de hecho no se admitía ningún tipo de oposición.

Posteriormente, según (Portalplaneta, 2009). Los nuevos partidos políticos conformados dentro de la dictadura, experimentaron difíciles divisiones internas desde su inicio, aunque su objetivo siempre fuese pretender el equilibrio y la firmeza; la distribución de la administración pública en todos sus niveles y modalidades (es decir, la nacional, provincial, municipal, empresas del estado, universidades) en partes iguales resultó ser una tarea demasiado compleja pero, fue el principio general que garantizó la participación de todas las fuerzas en el gobierno.

Así, una tercera parte de los cargos públicos quedó para cada cuerpo de oficiales de cada fuerza. Las anteriores intervenciones militares, que contaron con mayor peso de funcionarios civiles en la administración pública, se diferenciaron justamente de este gobierno del “Proceso”, en cuanto a la decisión anterior. Ya que la misma revelaba la índole de las relaciones entre las fuerzas, caracterizadas por una profunda desconfianza. Los oficiales de las Fuerzas Armadas tuvieron en sus manos, entre 1976 y 1981, la gran mayoría de los altos cargos de la administración pública.

Esto llevó a que cada funcionario pase a depender de dos jefes: su superior jerárquico en el escalafón de la administración pública y su superior militar; perjudicando finalmente el funcionamiento del Estado, fragmentándolo además en múltiples unidades que a su vez gozaban de una autonomía de hecho, con los previsibles efectos de la corrupción. Asimismo, el gobierno de “Proceso” y su ordenamiento institucional y jurídico, se caracterizaron por su incoherencia y arbitrariedad. A tal

punto de no cumplir con las leyes que el mismo había dictado, su evidencia más visible: la acción represiva (Portalplaneta, 2009).

A modo de conclusión , los partidos políticos representan un papel crucial en el establecimiento de la dictadura militar Argentina, en la medida que representan con fidelidad la crisis estructural en materia política y social a la que debió enfrentarse el país previo a la aparición de un nuevo actor en la escena, que llegara a cambiar el status quo y garantizar un nuevo orden estatal; de hecho, específicamente, los partidos políticos venían experimentando tanto crisis internas como crisis de identidad que dificultaban su desenvolvimiento normal en el panorama político, tanto así que gracias al establecimiento de la dictadura adquieren una nueva identidad e incluso algunos terminan desapareciendo.



### **CAPITULO 3 LA INCIDENCIA DE LA PRENSA EN EL ESTABLECIMIENTO DE LA DICTADURA MILITAR ARGENTINA EN 1976**

El hecho que Argentina haya experimentado un escenario de crisis previo al establecimiento de la dictadura en 1976, no quiere decir que definitivamente este haya desaparecido tras la posesión del nuevo gobierno militar, la inestabilidad política y económica desencadenada en protestas sociales, crisis de los partidos, terrorismo, guerrillas, entre otros factores son cruciales para entender el desenvolvimiento de la historia en este país.

En este contexto, aparece un actor que vale la pena estudiar por ser bastante polémico, en cuanto al papel que juega y que debería desempeñar como transmisor neutral y objetivo de información para la sociedad en general, la prensa. De hecho, aunque aparentemente no posee intereses sociales, políticos y económicos, resulta ser determinante en múltiples decisiones de los actores relevantes de esta historia.

Según (Mallimaci, 2014). Los grandes medios de comunicación, al igual que en 1966, que en 1955 y en 1930 colaboraron en el clima de indiferencia social y de apoyo explícito a imponer un orden autoritario. Así, a fines de marzo de 1976, la mayoría de la sociedad argentina o esperaba y deseaba impaciente o se conformaba al interior de sus hogares con el nuevo golpe militar y la promesa de “orden”.

En este punto, es evidente percibir la disyuntiva en la que se encontraba la prensa Argentina, pues por un lado debía centrarse en brindar la información objetiva y verdadera y por otro lado sufría la censura por parte del gobierno militar, lo cual nos lleva a concluir que termina convirtiéndose en “títere” manipulado para presentar solamente la información que le “conviene” al régimen.

En un contexto de inconstitucionalidad donde la dictadura se vale de “alimañas” políticas para lograr sus objetivos, según (Mallimaci, 2014). Para gobernar la dictadura inventa su propia legalidad y legitimidad, desconociendo la Constitución, el Parlamento y las normativas del estado democrático. Crea el “Acta” y “Estatuto “de lo que se llamará Proceso de Reorganización nacional.

La prensa se convierte en una especie de “títere” manipulado por el gobierno militar, al convertirse en aliado contundente para generar pánico y apoyo a la reforma que necesita el país si quiere lograr el “orden”. El problema es a qué precio.

(Benítez, 2014). Para el gobierno militar la finalidad última era cerrar un “ciclo histórico” abierto con el peronismo en 1946. Reorganizar una “nueva Argentina” por medio de una intervención radical que modifique profundamente un sistema político corrompido, que elimine al Estado demagógico, y que discipline a una sociedad descarriada. Un “Nuevo Orden” era necesario, y esto sólo lo podría efectuar un agente de cambio, que aunque parte institucional de Argentina, se veía a sí misma, y por gran

parte de la sociedad, como un organismo inmaculado del germen populista. Como se observa, una retórica del ordenamiento institucional encubría objetivos siniestros. Las Fuerzas Armadas, en fin, debían reencauzar a la Argentina por la senda “occidental y cristiana”, y el costo para tal cometido se aseguraba elevado.

(Mallimaci, 2014). Posterior al establecimiento del gobierno militar, inevitablemente se vuelve a sufrir el flagelo de la censura y la limitación, ya que este era contundente en solicitar apoyo total o de lo contrario quien no estaba con él, estaba en contra de él.

La prensa juega un papel crucial por su influencia en la generación de conciencia en la sociedad, responsable de transmitir la información necesaria y oportuna en concordancia con los sucesos más relevantes de la época. Pero, según (Mallimaci, 2014). Esta llega a ser blanco de duros cuestionamientos y críticas en torno a la pertinencia y veracidad de la información publicada, en la medida que debía tener contactos que estaban en contra de la dictadura. En otras palabras se ganaba enemigos constantemente, todo por tener distintas versiones de la historia.

Es oportuno describir la situación que vivió la prensa tanto en el gobierno de Perón como en el gobierno militar, años después del establecimiento de la última dictadura argentina.

(Borrelli, 2010). Por un lado, durante el gobierno de Perón, el escenario de crisis no podía ser peor para la prensa (el medio de comunicación más importante de la época) existía un panorama de libertades personales acotadas, estricta censura (con su lógica secuencia de autocensura) y se encontraba “mutilada” por el exilio o la prohibición, poco era lo que podía hacer para apartarse de la mediocridad. Algunas pocas publicaciones tentaron referirse metafóricamente o alegóricamente a la situación imperante.

(Marcelo, 2010). En la década del 70 el diario era el medio de comunicación masiva más popular. No competía con los otros medios, sino que se complementaban sus funciones. A la mañana sus noticias eran retomadas y ampliadas por la radio, mientras que a la noche la televisión lo hacía con los vespertinos y la radio. La alta politización de la época posicionaba al diario como un instrumento fundamental para los debates políticos. Estar informado, conocer las definiciones ideológicas de cada uno de los diarios de influencia nacional y comparar sus posiciones era una obligación para los militantes políticos. Los diarios no eran solo medios de información: su lectura determinaba una línea ideológica, una forma de comprender el mundo y la política. Los lectores más avezados leían dos periódicos, y también más en casos particulares. Además existía una pluralidad de publicaciones partidarias. La clase media exhibía hábitos de lectura consolidados; en sus hogares se leía al menos un diario y una o dos revistas. La oferta informativa era amplia. Argentina era el país de América -luego de Estados Unidos y Canadá- que más había desarrollado sus medios masivos de comunicación (Ford y Rivera, 1987). En 1976 los diarios más importantes de alcance

nacional se editaban en la Capital Federal: La Nación, La Prensa, Clarín, Crónica, La Razón y La Opinión.

Sin embargo, (Borrelli, 2010). El incremento de la violencia política luego de la muerte de Perón en julio de 1974 había transformado el ejercicio del periodismo en una profesión en asedio permanente. Y en el tercer gobierno (1973-1974) había generalizado una serie de procedimientos autoritarios en el campo cultural que envalentonaron a los sectores parapoliciales de la derecha más intransigente. Los periodistas y los medios de prensa se encontraban bajo la presión directa de estas bandas parapoliciales, de las organizaciones político-armadas de izquierda y también de la propia administración peronista. En ese tiempo fueron asesinados conocidos periodistas, mientras que otros sufrieron intimidaciones u atentados. Muchos decidieron marchar al exilio. Por su parte, las empresas editoras de periódicos sufrieron reiteradas “advertencias”, amenazas y atentados.

En este contexto, debe considerarse el avanzado grado de autocensura que se impusieron las empresas periodísticas y los periodistas que trabajaban en ellas, frente a la radicalización de los conflictos políticos y el avance represivo del Estado (recuérdese que desde octubre de 1975 las Fuerzas Armadas participaban formalmente de la represión de la guerrilla en todo el país, poniendo en práctica los métodos ilegales que se sistematizarían luego del golpe de Estado).

(Borrelli, 2010). Como parte de ese enfrentamiento, los órganos de prensa desplegaron una estrategia informativa que desprestigió aún más a un gobierno preso de sus propias contradicciones, y asolado por una coalición cívico-militar que desde junio de 1975 se aprestaba a tomar el poder a través de un golpe de Estado. En efecto, desde los editoriales y las crónicas políticas se redimensionaron las versiones sobre el golpe de Estado, se amplificaron los errores del gobierno, se desacreditaron las políticas implementadas y los planes que incluían algún tipo de traspaso legal del poder para salir de la crisis, entre otros recursos que se orientaban a profundizar el clima de desestabilización (al cual el propio gobierno contribuía con creces). En muchos casos, estas opiniones se realizaban en forma inversamente proporcional a la ponderación positiva de las Fuerzas Armadas.

En el año 1975 las redacciones y las publicaciones de los principales diarios fueron caja de resonancia de los rumores sobre el posible golpe de Estado, con el consiguiente desmedro para la estabilidad institucional. Y en el área de redacción de los periódicos las palabras “caos”, “desorden”, “crisis”, “desintegración”, “descontrol”, “desgobierno” eran frecuentes.

Hacia fines de 1975 la campaña de desprestigio contra el gobierno tomó mayor vehemencia, mientras las referencias hacia la realidad nacional se hacían cada vez más dramáticas y admonitorias. En los casos de los diarios La Nación, La Prensa y La Razón existió una orientación editorial deliberada para socavar aún más la ya frágil legitimidad del gobierno peronista, sugiriendo o avalando al golpe de Estado como la única salida

posible a la “crisis” nacional. Tal vez el caso paradigmático haya sido La Razón, que desde sus titulares en cuerpo catástrofe durante marzo de 1976 amplificó el clima golpista del momento (es recordado en ese sentido el titular de tapa del 23 de marzo de 1976: “Es inminente el final. Todo está dicho”). El diario Clarín, por su parte, fue un duro crítico de los extravíos del gobierno y construyó discursivamente al golpe como un desenlace lógico e “inevitable”, aunque no realizó una campaña editorial sistemática para socavar la gobernabilidad de la administración peronista. En resumen, puede afirmarse que el golpe del 24 de marzo de 1976 fue legitimado por la gran prensa nacional como la única solución política efectiva frente a los errores del gobierno, a una realidad social, política y económica que se juzgaba caótica, y frente a la necesidad de “refundar” a la sociedad argentina en todos sus ámbitos (Borrelli, 2010).

En este último aspecto, vale destacar que la posición editorial de los diarios en el momento inicial del nuevo régimen militar, tendió a converger con el hábito re fundacional con el que las Fuerzas Armadas se presentaron ante la sociedad. Tanto es así que, una vez echada a rodar la dictadura, y a medida que su “promesa re fundacional” se hacía cada vez más imprecisa, sin embargo los grandes diarios, a la vez que tendían a volverse más críticos hacia el gobierno, no dejaban de destacar la “inevitabilidad” y la necesidad histórica que había tenido el golpe frente al “caos” y el descalabro institucional del gobierno de Isabel Perón (Borrelli, 2010).

(Benítez, 2014). De una manera u otra, la dictadura militar buscó durante gran parte de su período de gobierno generar un alto grado de apoyo de la sociedad hacia sus

planes y acciones. A pocos meses de instalado el gobierno de facto, el presidente Videla, como también algunos funcionarios y gobernadores, instaban al acompañamiento y la participación del Proceso. La intención era, en lo posible, no quedar aislados de la sociedad. En parte, la convergencia cívico-militar que pretendía ser el Movimiento de Opinión Nacional, impulsado por Ibérico Saint-Jean y Jorge Aguado, titular de la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (CARBAP), implicaba el desarrollo de canales de diálogo para fomentar la continuidad del Proceso.

La propaganda permanente del régimen estuvo ligada, la mayor parte de las veces, a la construcción, en sentido público, de enemigos a la causa nacional.

Septiembre de 1979 representó otro importante golpe a la omnipotencia de la dictadura. Entre los días 6 y 20 de ese mes se realizó en el país la visita de la Comisión interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de Estados Americanos (OEA). La misma inspeccionó y recopiló información sobre los múltiples casos denunciados de desaparición de personas y otras violaciones a los derechos humanos. Por su parte, la propaganda oficial exclamaba: “Los argentinos somos derechos y humanos”. El gobierno procuraba ocultar cualquier indicio sospechoso y demostrar que los argentinos vivían libres y en paz, conforme la civilidad occidental.



Una imagen sumamente ilustrativa del momento quedó reflejada cuando un grupo de hinchas, que festejaban en las calles el triunfo del seleccionado argentino en el Mundial Juvenil de Japón, incitados por un periodista radial fueron a demostrar su alegría y libertad de expresión frente a la sede de la OEA, donde se hallaban los inspectores de la CIDH. Sorprendentemente, allí se encontraron con una larga fila de centenares de personas, que esperaban para presentar sus denuncias por la desaparición de uno o varios de sus familiares, así, “dos rostros del país se miraron a los ojos y a partir de allí ya nada volvería a ser igual. Los desaparecidos aparecían finalmente con un peso en la política argentina que no cesaría de crecer en los siguientes años” (Benítez, 2014). El 18 de abril de 1980 se dio a conocer -no en el país ya que no apareció en los medios- el informe elaborado por la Comisión. Se condenaba al gobierno argentino por las graves y numerosas violaciones a los derechos humanos entre 1975 y 1979. El gobierno rechazó las acusaciones de plano (Benítez, 2014).

La revista “Gente” de Editorial Atlántida, incitaba a sus lectores a escribir cartas contando “la verdadera situación del país” y suministraba direcciones de “activistas” contra la Argentina, entre los cuales se contaban Amnesty International, la OEA, la Comisión Internacional por los Derechos Humanos y la cantante italiana Ornella Vanoni, quien a su regreso de una serie de recitales dados en Buenos Aires en 1977 había declarado: “L’Argentina é un inferno”. En este último caso se intentó justificar el comentario de la cantante diciendo que había sido sacado de contexto, y que en realidad ella se había referido al estado de algunas zonas de la ciudad, entonces en obras por la construcción de las grandes autopistas, uno de los más ambiciosos proyectos del intendente, el brigadier Osvaldo Cacciatore.

Como una forma de contrarrestar la “campana anti argentina”, se contrató a la empresa norteamericana "Burson & Marsteller" para mejorar en todo el mundo la imagen del país, más específicamente la de su gobierno, a un costo de medio millón de dólares, la que pergeñó la frase “Los argentinos somos derechos y humanos”, irónico juego de palabras que lucía en los parabrisas de transportes públicos y automóviles particulares, y que fue difundido ampliamente por cines y televisión, contando, de buen o mal grado, con Para que la ciudadanía siguiera siendo “derecha y humana” era para lo que había llegado el Proceso, dispuesto a quedarse largo tiempo. Su misión era defender al país de la “subversión apátrida”, pero además vigilar sus lecturas y esparcimiento. Gran cantidad de autores argentinos extranjeros desaparecieron de las librerías, los canales de televisión estaban directamente controlados por las tres armas (Fuster, 2007).

Sumado a esto la prensa se vio obligada de una forma involuntaria ha ayudar a la dictadura informando hechos de trascendencia mundial en el deporte como fue el que argentina organizara el campeonato mundial de fútbol de 1978 y ganara en la final frente a Holanda y algunos medios internacionales como la revista TIME que escribían en sus ediciones “Los argentinos, una nación herida que esta recobrándose de una guerra civil no declarada, de espantosa brutalidad, entre la extrema izquierda y la extrema derecha, necesitaba una celebración”, lo que desencadeno también comentarios como “para sorpresa de algunos periodistas europeos, que vinieron esperando encontrar sangre en las calles y confusión e incompetencia en la organización, el gran carnaval de futbol fue realizado con eficiencia y el humor prevaleciente fue una cálida hospitalidad, y algunos comentarios de diarios como El País, Madrid, Junio de 1978 “El triunfo final de la selección argentina en el mundial de fútbol ha supuesto que la Junta Militar que

dirige el General Videla haya cubierto con creces los objetivos que se propuso al emprender la organización del campeonato. Durante veinticinco días, los problemas del país argentino han pasado a un segundo plano y el título mundial conseguido por su selección los mantendrá ocultos durante mas tiempo”, logrando así dar mas tiempo a la dictadura, (Testimonios y documentos 2011).

A modo de conclusión, no se trata de encasillar a la prensa como un actor a favor o en contra de la dictadura, simplemente es necesario estudiar el contexto de crisis en el cual se encontraba argentina para entender que la sociedad era presa de “manipulaciones” bien sea directamente por la prensa y la información que suministraba o porque el gobierno militar estaba detrás de esta para controlar el escenario.

Al respecto, (Benítez, 2014). Sostiene que, más allá de los objetivos particulares o colectivos la verdadero destinataria del terror fue la sociedad. Desde el primer momento esta fue el blanco donde pretendió calar el miedo extremo que –como afirma Juan Corradi- no sólo tuvo el objetivo de controlar, sino también de cambiar a los actores sociales. De este modo, el terror se vuelve “esencialmente una técnica de desorientación, que apunta a privar a los sujetos de la oportunidad de calcular y prever las consecuencias de sus acciones. Es una forma de poder en la cual la conformidad no garantiza la seguridad. Su efecto principal es la generación de una atmósfera de ansiedad –una ‘cultura de miedo’”. Que se desplegaba más allá de los espacios comunes y lograba insertarse en lo más profundo de la intimidad, para permitir así, que cualquier comportamiento “no normal” sea señalado inmediatamente como sospechoso; en

definitiva, al espacio público clausurado se adicionaba el control micro social. Y esto sólo pudo ocurrir, en gran parte, gracias a la pasividad o inmovilidad producida por el mismo terror, cuanto a la adhesión de algunos sectores sociales que se encontraban atraídos por los postulados básicos del régimen.

## **CAPITULO 4: LA INCIDENCIA DE LA IGLESIA EN EL ESTABLECIMIENTO DE LA DICTADURA MILITAR ARGENTINA EN 1976**

Tal como hemos venido estudiando a lo largo de este escrito, el establecimiento de la dictadura militar Argentina obedece a la influencia de múltiples actores y factores que juegan un papel determinante en el curso de la historia. Mas allá de los intereses y estrategias usadas por las Fuerzas Armadas para inmiscuirse en el plano político, aprovechando el vacío institucional y la crisis política que venía afectando a los partidos políticos; la manipulación de los medios de comunicación, los complots, alianzas y terror sembrado en la sociedad para crear pánico pero ante todo respeto por el régimen son tan solo una pequeña muestra de los alcances que pueden llegar a tener aquellos actores que saben manipular muy bien las influencias y herramientas a su favor.

Continuando con el estudio de los actores socio políticos que inciden en el establecimiento de la dictadura militar en argentina, llega la hora de prestar atención al papel de la iglesia (es importante destacar el poder de “convocatoria”, el número de adeptos y seguidores que puede llegar a influenciar).

Una vez instaurado el gobierno militar en 1976, era inminente lograr un consenso inicial con amplios sectores e instituciones de la sociedad para lograr una mayor intervención de las Fuerzas Armadas sobre la vida institucional del país. Tanto así que (Benitez, 2014). Tuvo la adhesión de la cúpula de la iglesia, de un sector destacado de los partidos políticos, de las asociaciones empresarias, y de los medios de

comunicación. Pero, por sobre todo, obtuvo el consentimiento de buena parte de la sociedad.

Este consenso permite entender la incidencia de la iglesia en el establecimiento de la dictadura militar argentina en 1976, desde varios puntos de vista, teniendo en cuenta, por un lado la legitimidad política que representa el gobierno militar en Argentina y la legitimidad que aporta la sociedad al dar reconocimiento como el único actor capaz de sacar de la crisis al país, en ese momento. En ese orden, el gobierno militar llega a representar valores y virtudes defendidos especialmente por la iglesia. Por otro lado, existe un tema polémico en cuanto al apoyo que brinda la iglesia al gobierno militar y por ende a sus políticas, decisiones y acciones, lo cual puede llegar a convertirse en complicidad si se habla del terrorismo de estado y la violencia que desato esa dictadura en Argentina.<sup>2</sup>

De hecho, la relación existía desde muchos años atrás dado que una de las características argentinas es que en la coalición golpista tiene activa participación el catolicismo. (Mallimaci, pdf, 2006). La Iglesia Católica se asocia a las Fuerzas Armadas y al Estado a partir de los 30 y se convierte, poco a poco, también en un actor político legítimo dado que logra asociar la identidad nacional a la identidad católica, argentinizar, evangelizar, luchar contra el comunismo y el liberalismo, sospechar de la vida democrática y ampliar así su presencia en el espacio público en una sociedad de

---

<sup>2</sup> Sacerdotes, encabezados por el vicario del ejército monseñor Victoria Bonamin, justificaron los métodos de la represión, incluso la tortura y las ejecuciones clandestinas de prisioneros. Cuando teníamos problemas de conciencia, ha manifestado el almirante Zariategui, acudíamos a nuestros asesores espirituales y estos nos tranquilizaban. Los documentos a este respecto son abundantes, pero su mención excede los límites del presente artículo (Mignone, 1986).

inmigrantes a la búsqueda de su “ser nacional”. Se produce un lento proceso descatalogación de las Fuerzas Armadas y de militarización de la Iglesia.

El mesianismo se traslada de una institución a otra. Junto a cada golpista hay un “especialista católico”. Consideran que cuando “la Patria está en peligro” hay un deber de sacrificarse para “salvarla”. Hasta el día de hoy lo siguen repitiendo las autoridades eclesíásticas. La institución eclesial – que crece y se amplía durante las dictaduras- cumple un importante papel como legitimadora de los golpes, como institución que se auto comprende junto a las Fuerzas Armadas fundante de la Patria y la Nación y como proveedora de funcionarios en el Estado autoritario.

Las Fuerzas Armadas y la Iglesia Católica ganan también amplias legitimidades en la sociedad política, la sociedad civil y en el sentido común dominante con el correr de los años. Son a partir de la década del 30, actores reconocidos, valorados y buscados para reconstruir poder por el conjunto de los partidos políticos, organizaciones empresariales(Sociedad Rural Argentina, Unión Industrial Argentina, Asociación de Bancos de la Argentina) movimientos sociales y organizaciones civiles más allá de las ideologías década uno de esos grupos. Más aún, los golpes militares-religiosos de la historia argentina tuvieron apoyo, pasivo o activo, por acción u omisión, de la ciudadanía. Los militaristas asaltan el poder cuando logran un consenso social amplio (Mallimaci, pdf, 2006).

La influencia de la Revolución cubana en 1960, de las enseñanzas renovadas del Concilio Vaticano II en el cristianismo en 1966 y su puesta a tono latinoamericano en Medellín en 1968 y un aire de época que busca dislocar los límites “tradicionales” de la fábrica, la familia, la escuela, el estado, la religión y el cuerpo logran crear en la Argentina un imaginario del compromiso revolucionario donde los sueños de transformación y radicalidad son posibles “aquí y ahora”. Para un sector significativo de la juventud y de la militancia partidaria, nacionalismo y socialismo dejan de ser antagónicos, la posibilidad de recrear una sociedad desde y con el pueblo, crear un arte comprometido es posible y en este camino, se rehacen, re significan nuevas y viejas identidades consideradas revolucionarias, donde el peronismo (o mejor dicho, las nuevas comprensiones del peronismo) ocupan, una vez más, un lugar dominante (Mallimaci, pdf, 2006).

La eliminación de toda protesta renovadora en la Iglesia Católica se hizo con el apoyo, denuncia, complicidad y participación activa de obispos, sacerdotes, religiosos, religiosas y militantes cristianos que se reconocían en las proclamas de lucha contra “la subversión” que llevaban adelante las Fuerzas Armadas. En este sentido, es indiscutible la presencia de un catolicismo que en nombre de “la patria amenazada por la subversión y el comunismo” justifica, legitima y participa activamente del accionar de las Fuerzas Armadas. Supone una serie de interacciones que van desde las relaciones entre las cúpulas eclesiásticas y militares hasta conexiones en el orden de lo ideológico.

Al mismo tiempo también tendremos a individuos que ligados al catolicismo son asesinados, torturados y detenidos-desaparecidos. Otros se comprometen en la verdad



del incipiente pero cada vez más fuerte movimiento de defensa y promoción de los derechos humanos que nace al poco tiempo de que el terrorismo de estado hiciera sentir sus secuelas. No se trata a diferencias de otras experiencias en América Latina de organizaciones surgidas de la institución eclesial sino de múltiples iniciativas por “cuenta propia”.

La “depuración” en escuelas, universidades, ministerios estatales, provinciales y municipales se realizó denunciado, expulsando e intimidando a numerosos educadores, educadoras y funcionarios. Al mismo tiempo se impusieron nuevos contenidos en la enseñanza que como decía el Acta del 24 de marzo de 1976 debía “restituir los valores esenciales que sirven de fundamento a la conducción integral del Estado, enfatizando el sentido de moralidad... erradicar la subversión... ubicación en el mundo occidental y cristiano” (Mallimaci, pdf, 2006).

Múltiples son los documentos que prueban la presencia de la iglesia católica en reuniones cruciales para el régimen, encuentros secretos, complots, alianzas, secretos, manipulación política y social, según autores como Mallimaci o Benítez.

En esta medida, es claro que, el episcopado católico prestó un claro apoyo al régimen. Sin embargo, se encontraba entre la espada y la pared, por ejemplo, la iglesia aunque en algunos documentos - emitidos por la presión de las víctimas -, indicó la ilicitud de los hechos que se cometían, no señaló a los responsables, ni rompió con el Estado criminal. Finalmente optó por callar. Lo dicho no significa que la totalidad de

los miembros de la Iglesia estuvieran en dicha posición. Hubo excepciones en el mismo episcopado (Mignone, 1986).

A manera de conclusión, en el contexto de “manipulación” del régimen, es difícil determinar que actores son buenos y cuales son malos, solo queda conformarnos con el estudio del escenario y describir los actores y factores determinantes en el establecimiento y desarrollo de la dictadura. Esto, con base en que el gobierno militar siempre manifestó que quien no estuviera con él estaría contra él, en ese orden, la iglesia no tenía más remedio que omitir, callar y muchas veces aceptar y permitir el desarrollo de acciones y decisiones no muy benéficas para el país.

Por otro lado, existía un vínculo institucional entre estas dos “fuerzas” (militar y eclesiástica) las cuales las mantenían unidas desde hace muchos años. Además, hace falta entender no solo el contexto externo en que se desenvolvía el accionar de la iglesia, sino su estructura interna, su funcionamiento (jerarquías y órganos de control y decisión) para entender quién y por qué podía llegar a ocupar cargos significativos en el gobierno.

## **CAPITULO 5 .LA INCIDENCIA DE LOS EMPRESARIOS EN EL ESTABLECIMIENTO DE LA DICTADURA MILITAR ARGENTINA EN 1976**

Como ya hemos venido demostrando, el establecimiento de la dictadura militar en Argentina obedece a la incidencia de múltiples actores y factores que juegan un papel vital en la construcción de escenarios que permitan la legitimación del gobierno militar; también hemos venido demostrando que algunos actores han sido víctimas, más que cómplices ante las circunstancias y que, finalmente no siempre los actores estaban de acuerdo con las medidas adoptadas. En este orden, el ultimo actor que hemos decidido analizar y describir en el contexto de la responsabilidad que posee en el establecimiento y consolidación de la última dictadura militar argentina es el papel de los empresarios.

Nuevamente cabe recordar que es demasiado complejo entrar a determinar que actores están a favor o en contra de la dictadura, dada la coyuntura en que se desarrolla la historia. En otras palabras no es posible precisar que empresas en específico se favorecían con las medidas adoptadas por el régimen y cuales estaban en contra. Sin embargo, es importante realizar un estudio a conciencia del escenario que nos permitirá describir el papel de los empresarios en el establecimiento de la dictadura argentina.

(Benítez, 2014). Desde mediados de la década del cincuenta, tras el derrocamiento del primer proyecto nacional-popular del país, la Argentina se vio sumida en una notable agudización de su crisis institucional, producto entre otras razones, del incremento de los desequilibrios económicos.

El párrafo anterior permitiría concluir que los empresarios no se encontraban muy contentos con el escenario de crisis al cual se enfrentaban, de hecho, Argentina se encontraba atravesando por una de sus peores crisis tanto a nivel político, social como económico, este último aspecto, sin lugar a dudas el más sensible para los empresarios.

Adicionalmente, (Benítez, 2014). El contexto internacional no era precisamente una expresión de buenos augurios. El primer lustro de los años setenta estaba marcado por la clausura de un excepcional período expansivo de la economía mundial – especialmente en el mundo capitalista desarrollado- que, iniciado durante la posguerra de los años cincuenta, evidenciaba su final por medio de una considerable desaceleración de los índices de crecimiento.

Este párrafo nos lleva a inferir que los empresarios creían que serían los más beneficiados con el establecimiento de la dictadura, en especial si representaba el camino hacia la prosperidad y el bienestar que tanto anhelaban. Sin embargo, la historia resulta estar en su contra, ya que, las reestructuraciones de las que son “víctimas” terminan siendo peor que la misma crisis que querían superar.

Es por eso, que por un lado, los empresarios constituyen un apoyo para la dictadura Argentina, tal como lo ha demostrado Diego Benítez en sus escritos (ya que ven la oportunidad de salir de la crisis), dado que, desde mediados de la década del cincuenta, tras el derrocamiento del primer proyecto nacional-popular del país, la

Argentina se vio sumida en una notable agudización de su crisis institucional, producto entre otras razones, del incremento de los desequilibrios económicos. (Benítez, 2014). En los meses previos al golpe, la persistente inflación y el muy elevado déficit fiscal, cubierto en gran medida con emisión monetaria, anticipaba medidas urgentes.

El diagnóstico era claro y se encontraba extensamente aceptado en los sectores oligárquicos y empresariales de orientación librecambista, sobre los que confluían las nuevas ideas tecnocráticas y tecno científicas del ámbito económico mundial. Cabe volver a señalar, que durante la década del '70 el sistema económico internacional se encontraba atravesando una crisis que dio lugar a un cambio a nivel mundial del modelo histórico de acumulación, que se había caracterizado por su alta tasa de ocupación, una importante cantidad de reformas sociales y ampliación del Estado, que conformaba sistema de integración y desarrollo conocido como Estado Benefactor (o Welfare State).

Esta fracción del poder económico va a persuadir al sector militar sobre la necesidad de imponer un nuevo modelo de orientación liberal. La nueva alianza, compuesta por el sector rural tradicional, el capital financiero y el sector industrial concentrado de bienes de exportación, junto a algunos mercado internistas con capacidad de diversificación, dejará atrás a la vieja alianza de industriales concentrados del gobierno de Onganía. Ahora tendrá su oportunidad de cambiar el sistema de acumulación consolidado hasta entonces y someterlo así al tratamiento neoconservador y a la lógica ordenadora del mercado (Benítez, 2014).

Las acciones por parte del gobierno en torno a mitigar los efectos de la crisis se centraron en reorganizar políticamente al país e implementar un proyecto económico de magnitud. Para ello, se propuso terminar definitivamente con el modelo redistribucionista que propiciaba una fuerte presencia estatal sustentando a una organizada clase trabajadora y a un sector empresario de orientación mercado internista. Las nuevas medidas terminaron con el período de recomposición económica, que por otro lado, podría haber continuado con su funcionamiento por varios años más. Sin embargo, la prioridad no era el crecimiento económico, ni su estabilidad, sino la transformación radical del sistema anterior, aún en perjuicio, en el corto plazo, de los intereses de extensos sectores que apoyaban al gobierno (Benítez, 2014).

La existencia de “crédito fácil” disponible en los países centrales, como resultado de un largo período de crecimiento mundial, sumado a fenómeno de los “petrodólares”, que implicó un excedente de liquidez en las oligarquías árabes debido a la gran subida del petróleo, hizo que el modelo de economía abierta de Martínez de Hoz adquiriera grandes préstamos en el exterior. Con ellos se subsanó desfasajes en la balanza de pagos y se engordaron las reservas del Banco Central. Esto implicó un gran endeudamiento por lo que momentáneamente la economía se expandió con fondos externos a través de una política de gran gasto público. El dinero del Estado estuvo también dirigido, entre otros destinos, a la expansión del sector privado contratista vinculado al gobierno y a la modernización del armamento militar. Acciones que, desde el Ministerio de Economía, tendieron a ahuyentar los fantasmas del desempleo en la sociedad, como también a menguar las críticas internas al modelo implementado. Por su parte, en este sistema de gran especulación y bonanza crediticia del sector privado - capaz de contraer préstamos externos- incrementó de forma notable su deuda en el

extranjero. Este dinero no sólo fue utilizado por estas grandes firmas para abastecer su cadena productiva sino que en gran medida fue dirigido a la especulación financiera para obtener millonarias ganancias. Posteriormente, la gran deuda privada de éste sector empresario, resultado del juego especulativo vía créditos externos, será nacionalizada (Benítez, 2014).

En este punto vale la pena analizar que el contexto prácticamente obliga a los empresarios a aceptar las medidas tomadas por el gobierno, de hecho llegan a verse limitados por la crisis inflacionaria, existía sobrevaloración cambiaria, es decir, un dólar barato, que trajo consigo la consolidación de la especulación y ganancia financiera, donde el atraso cambiario provocó una mayor estimulación a la invasión de artículos externos, perjudicando así a las ya golpeadas Industrias de Sustitución de Importaciones (ISI), que despojadas de la protección estatal y sus beneficios crediticios e impositivos debieron en un alto porcentaje cerrar sus puertas, también se incrementó la especulación financiera. Ésta consistió en la obtención de dólares mediante el pedido de créditos en el extranjero, que luego se cambiaban por pesos y se los colocaba en un plazo fijo a un interés que oscilaba entre el 9% y el 25%, cuando en el exterior sólo se pagaba entre el 3% y el 7%.

(Benítez, 2014). Otro proceso esencial de carácter paradójico tuvo lugar durante el gobierno militar en el transcurso de los años de reforma económica. Si el lema liberal era “achicar el Estado para agrandar la Nación” la práctica económica de Martínez de Hoz no escatimó en gasto para embarcarse en grandes obras públicas. Este proceso fue el eje central del crecimiento de un empresariado nacional parasitario que terminó de

imponerse por sobre sus pares tras un largo período de luchas, alianzas y crecimiento inestable. La denominada “patria contratista” consistió en un mecanismo de redirección selectiva de contratos para obras públicas y desarrollo bélico hacia empresas privadas con estrecha vinculación al gobierno. Este mecanismo de privatización periférica dio cuantiosos beneficios a grandes grupos locales mediante diversas prácticas prebendarias. Estos grandes grupos formaron parte de la fracción concentrada de la burguesía industrial de carácter transnacional diversificado e integrado, que junto al capital extranjero, “sintetizaron sus proyectos históricos en un nuevo proyecto dominante que constituyó la base social fundamental de la dictadura militar”. De tal modo, se procedió a una “desindustrialización selectiva”, donde sólo se beneficiaron estas grandes industrias de bienes intermedios y de capital concentrado pertenecientes a rubros como celulosa, siderurgia, aluminio o petroquímica.

Mientras que puertas adentro la deuda contraída por los grupos privados pasó a manos del Estado. Este punto esencial dio el inicio a otro proceso de gran endeudamiento, ya que si bien éste era creciente y el mismo estaba dirigido a sostener las cuentas del Estado, a partir de 1979 la deuda externa Argentina comenzó a crecer escandalosamente. Hacia febrero de 1981, el plan económico había caído ya en un proceso de profunda crisis que terminaría con el mandato de Videla y el alejamiento definitivo de Martínez de Hoz del Ministerio de Economía (Benítez, 2014).

En definitiva, el papel de los empresarios en el establecimiento de la dictadura en Argentina, responde a una coyuntura dentro de la política económica de la dictadura, dado que ante este escenario, la agenda del gobierno se encuentra concentrada en tratar



de mitigar los efectos negativos de la crisis internacional hacia el sector empresarial, lo cual lo lleva a hacer frente a las exigencias por parte de los industriales, sindicales y actores del sector financiero del país.

(Benítez, 2014). Puede sintetizarse entonces en un decidido cambio de rumbo tendiente a eliminar las bases estructurales que posibilitaron una sociedad con un importante grado de integración, debido, especialmente, al alto grado de equidad en la distribución del ingreso y la riqueza. Los rasgos más sobresalientes que operaron sobre esta realidad fueron: una desindustrialización selectiva que condujo a una desocupación estructural y a un incremento de la precariedad laboral; una importante concentración de capital en pocos actores económicos, vinculados centralmente a la “patria contratista”; la hegemonía del capital financiero por sobre las actividades productivas; y un sustancial endeudamiento externo, vinculado estrechamente al nuevo sistema de dominación. El éxito radicó en la creación de un nuevo modelo de acumulación en manos del capital concentrado trasnacional, que en conjunción con los nuevos acreedores externos conformó un bloque de poder disciplinante y distributivo que pervivirá hasta la actualidad. Dentro del campo social, se produjo un vasto proceso de reestructuración con el fin de fortalecer las bases de dominación, fragmentar al sector medio e individualizar las conductas sociales. Fundamentalmente, se tendió a la destrucción de las bases económicas de sustentación social mediante modificaciones que posibilitaron la descomposición y el surgimiento de nuevos grupos de trabajadores asalariados no obreros, de mayor precariedad y escaso poder organizativo, y por lo tanto, de mayor vulnerabilidad a las imposiciones del mercado.

## CONCLUSIONES

La incidencia de los actores socio políticos que determinaron el establecimiento de la dictadura militar Argentina se caracteriza por la influencia de múltiples factores que juegan un papel vital en el proceso previo, durante y posterior al golpe de estado de 1976, que desarrollaron una serie de cambios al interior de Argentina pero que siempre estuvieron marcados por graves violaciones a los derechos humanos y ha decisiones que desencadenaron protestas sociales de todo nivel con resultados nefastos para la tranquilidad del pueblo.

Una eminente crisis económica mundial parece no ser detonante de un conflicto interno; sin embargo el vacío institucional y la “ineptitud” administrativa y política para tratar de mitigar los efectos negativos para la nación, resultarían influenciando de manera contundente el rumbo de la historia.

En el escenario siempre se presentan dos perspectivas desde el punto de vista de los actores que inciden en el establecimiento de la dictadura, por un lado quienes estaban a favor y por el otro quienes no estaban de acuerdo con los principios pero de igual manera, terminaban siendo determinantes al favorecer los intereses del gobierno militar.

Previo a la dictadura, a la crisis social, se sumaba también, un superlativo grado de violencia política, vinculada tanto a las luchas intestinas dentro del mismo peronismo, como a la acción de grupos guerrilleros de izquierda que se enfrentaban a las fuerzas de represión estatal y paraestatal. El proceso de radicalización de grupos políticos, iniciado a finales de los años 60, continuaba expresando su lado más extremo en la acción armada, considerada como el estadio superior de la acción política tradicional.

Poco a poco el rumbo de la historia ha ido demostrando una división entre la izquierda y la derecha, dando la percepción que la dictadura militar resultaba teniendo un tinte izquierdista.

Sin embargo, el discurso político de la junta militar pretende mostrar un nuevo escenario más positivo para la nación, incluso llegando a cambiar el uso de la fuerza por un lugar en el poder gracias al discurso elaborado a favor de la prosperidad y el bienestar. Específicamente se cambia el hecho de entrar por la fuerza, por el hecho de lograr transformaciones profundas en el modelo político y administrativo, incluso el económico al cambiar el modelo de acumulación para rehacer el orden, cambiando el status quo después de tantos años de un gobierno constitucional.

Entrando a concluir la incidencia de cada uno de los actores en el establecimiento de la dictadura militar, podemos empezar por los partidos políticos los cuales se caracterizaron en un contexto previo al golpe militar por serios problemas

frente a la crisis de institucionalidad, la violencia política y la disputa entre gobiernos democráticos y constitucionales, lo cual generaba serios problemas de identidad al interior de estos. Durante la dictadura no pudieron solucionar sus problemas y finalmente resultan desapareciendo. Hecho que permitiría concluir que el gobierno militar gana mucho más espacio y poder en la escena política del país gracias a la crisis de los partidos. Lo cual se traduce en mayor autonomía para lograr cualquier tipo de propósitos, propio de una verdadera dictadura.

Lastimosamente, los problemas no terminan con la llegada de un gobierno militar, cabe recordar que previo al golpe de estado y sumado a la crisis económica, política y social, aparece un nuevo elemento en el escenario, el terrorismo asociado a la existencia de guerrillas y grupos que amenazaban la tranquilidad de la nación (múltiples son los autores que hablan al respecto, Benítez, Mallimaci, Fuster, entre otros que describen detalladamente sucesos crueles y macabros sobre secuestros y masacres que no discutimos en este estudio). Sobre este cruel aspecto, cabe anotar dos conclusiones, la primera que los hechos violentos ya se venían presentando previo al golpe de estado, la segunda que, el gobierno militar se vio seriamente ligado a sucesos siniestros y macabros alrededor de muertes y desapariciones de personas en contra del régimen durante la dictadura. Lo cual, además de ser aterrador pone sobre la mesa cuestiones en torno a la responsabilidad de estos en hechos que buscaban sembrar el terror y el caos a favor de la propaganda donde la junta militar aparecía como “héroe” y “salvadora” antes, pero también como líder absoluto durante la dictadura, llegando a difundir premisas como: *“quien no está con nosotros, esta contra nosotros”*.

Para el gobierno militar la finalidad última era cerrar un “ciclo histórico” abierto con el peronismo en 1946. Reorganizar una “nueva Argentina” por medio de una intervención radical que modifique profundamente un sistema político corrompido, que elimine al Estado demagógico, y que discipline a una sociedad descarriada. Un “Nuevo Orden” era necesario, y esto sólo lo podría efectuar un agente de cambio, que aunque parte institucional de Argentina, se veía a sí misma, y por gran parte de la sociedad, como un organismo inmaculado del germen populista. Sin embargo, el nuevo ordenamiento institucional encubría objetivos siniestros.

Continuando con las conclusiones sobre la incidencia de cada actor en el establecimiento de la dictadura militar, la iglesia cobra un singular papel si tenemos en cuenta el poder de convocatoria y el grado de fidelidad que puede llegar a despertar basado en sus discursos, pero encaminados hacia los intereses del gobierno de turno. En este orden, quedan sobre la mesa varias cuestiones debatibles en torno a la neutralidad y objetividad de la iglesia, dado que en el capítulo cuarto quedo demostrado que en repetidas ocasiones la iglesia fue cómplice de los actos de la dictadura.

Evidentemente, en plena represión y euforia dictatorial no hay diálogo con los partidos políticos (incluso estos llegan a desaparecer o por lo menos en la forma como se conocían) pero sí encuentros periódicos con jerarcas católicos y notables del ámbito cultural y social. Hay un nuevo intento de la derecha argentina de formar una coalición cívico-militar que hiciera suyo las propuestas de las Fuerzas Armadas.

Los empresarios como actores incidentes en el establecimiento de la dictadura juegan un papel crucial antes y durante su ejercicio de poder, por un lado, la crisis económica mundial y la mala administración del estado por parte del gobierno de Perón hacia urgente la necesidad de reordenar el estado y tomar medidas que permitieran mitigar los efectos negativos de la crisis. Esto se traduce en una transformación económica que permitiera reforzar, el liderazgo de los sectores económicos más competitivos, que en realidad resultaron ser los que poseían un mayor poder de vinculación con el Estado.

Lo anterior pone de manifiesto una sencilla pero contundente conclusión, los empresarios poseían intereses muy amplios (económicos) que los llevaban a apoyar fielmente la dictadura.

En cuanto a la prensa, nuevamente las perspectivas son dos: una donde la prensa busca hacer su trabajo con honestidad y presentar información clara y verdadera a toda la sociedad sin tomar partido en el escenario de crisis, ante los juegos de poder que se desataban. Y dos: en un escenario de censura y manipulación de la información por parte del gobierno la prensa no tiene más remedio que ser cómplice, participe y “títere” del gobierno al presentar solamente la información que estaba a favor de la dictadura.

Esta prensa que una vez instaurada la dictadura se encontró con sucesos en especial de índole deportivo, como el campeonato mundial de fútbol ganado por argentina en 1978, el campeón del mundo de boxeo Carlos Monzón y el máximo

tenista argentino Guillermo Vilas, en lo que podemos afirmar “la utilización del deporte como propaganda, fue una constante de la dictadura”, dándole respiro a las críticas a Videla y su junta militar, sumado a esto el manejo que dio la prensa a la recuperación de las islas las Malvinas en abril, que termino en una derrota catastrófica políticamente a la dictadura y que poco a poco determinaron la caída de la dictadura militar .

Finalmente, resulta satisfactorio poder decir que el escenario en que se desenvuelve la historia en torno al establecimiento de la dictadura militar en Argentina no posee un solo actor, un solo bando o un solo desenlace. Dado que, son múltiples los actores y factores que inciden en este proceso, son múltiples las perspectivas y los rumbos que va tomando la historia, el hecho de ser afectados por la crisis económica mundial, la política exterior y una marcada propaganda pro o contra dictadura que venía desde el exterior , consecuencia del contexto de las relaciones internacionales en que se venía desarrollando la región latinoamericana con sus dictaduras y otros sucesos; queda la satisfacción de haber hecho un ejercicio de estudio a conciencia donde es imposible tomar posiciones o juzgar a los actores que aparentemente no realizan las cosas de la manera que consideramos generalmente correcta.

## REFERENCIAS

Benitez, D. (s.f.). *riehr*. Recuperado el 2 de septiembre de 2014, de <http://www.riehr.com.ar/archivos/Educacion/La%20dictadura%20militar%20Monaco%20Benitez.pdf>

Borrelli, M. (21 de noviembre de 2010). *VOCES Y SILENCIOS: LA PRENSA ARGENTINA DURANTE LA DICTADURA MILITAR*. Obtenido de file:///C:/Users/petunia/Desktop/prensaargentina.pdf

EIAL. (2008). *ESTUDIOS INTERDISCIPLINARIOS DE AMERICA LATINA*. Recuperado el 2 de MAYO de 2014, de [http://www1.tau.ac.il/eial/index.php?option=com\\_content&task=view&id=260&Itemid=175](http://www1.tau.ac.il/eial/index.php?option=com_content&task=view&id=260&Itemid=175)

Fuster, J. (2007). *EL PROCESO DE REORGANIZACIÓN NACIONAL*. Recuperado el 17 de septiembre de 2014, de [https://gupea.ub.gu.se/bitstream/2077/3221/1/anales\\_3-4\\_fuster.pdf](https://gupea.ub.gu.se/bitstream/2077/3221/1/anales_3-4_fuster.pdf)

Hoz, M. d. (2000). *martinezdehoz.com*. Recuperado el 28 de noviembre de 2014, de [martinezdehoz.com](http://martinezdehoz.com)

Mallimaci, F. (2006). *pdf*. Recuperado el 16 de septiembre de 2014, de [http://www.elortiba.org/pdf/mallimaci\\_terrorismo.pdf](http://www.elortiba.org/pdf/mallimaci_terrorismo.pdf)

Mignone, E. (1986). *Iglesia y dictadura La experiencia Argentina*. Recuperado el 19 de septiembre de 2014, de [http://www.nuso.org/upload/articulos/1378\\_1.pdf](http://www.nuso.org/upload/articulos/1378_1.pdf)

portalplaneta. (2009). *portalplaneta*. Recuperado el 16 de septiembre de 2014, de <http://www.portalplanetasedna.com.ar/golpe76.htm>

Liliana Caraballo, Noemí Charlier, Liliana Garulli (2011) *Eudeba* Universidad de Buenos Aires sociedad de economía mixta.

Campo González G, *La Guerra de las Malvinas o Falkland*, primera Edición Julio 1984, Ediciones Tercer Mundo.

Raúl Daniel Niño Buitrago, Julián Iregui Roab, *La teoría de la guerra de distracción*, Revista Científica "GENERAL JOSÉ MARÍA CÓRDOVA" Rev. Cient. Gen. José María Córdova Volumen 12, Número 14, Año 2014.

Eduardo Luis Duhalde, *El Estado Terrorista Argentino*, Edición Definitiva, editorial COLIHUE 2010.

Recortes de prensa, única edición 23 anexo de eventos importante de Argentina 1970-1989.

Coronel Javier Martín Leguizamón, Agregado Militar de Argentina, entrevista y conferencia, procesos reformista de Argentina, semilleros UMNG.



Teniente Coronel Juan Carlos Arias Roig, Escuela de Ingenieros Argentina, entrevista  
antecedentes golpes de Estado en Argentina, [jariasroig@ejercito.mil.ar](mailto:jariasroig@ejercito.mil.ar).